

Bruselas, 3 de septiembre de 2021

Estimado Comisario Reynders,

El pasado mes de abril, y de manera reiterada con anterioridad, llamé su atención sobre los problemas de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España, a causa de la politización del sistema de elección, en el que intervienen el Congreso y el Senado. En ese momento 2.500 jueces españoles se movilizaron contra la reforma que planea el Gobierno del CGPJ.

Usted mismo tuvo que intervenir con acierto para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que evite la politización en el gobierno de la judicatura, con el objetivo de velar eficazmente por la separación de poderes y por ende por la calidad de la democracia española.

Hoy me veo en la obligación de comunicarle que el ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado que "en un Estado de derecho, en una democracia con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos, a todos nos eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado".

Es de especial gravedad una aseveración como ésta viniendo de un alto cargo del Gobierno de España, toda vez esa intromisión partidaria en el gobierno de los jueces lleva décadas implantada, en contra del espíritu de nuestra Constitución y de las propias reglas de la Unión Europea.

Confío nuevamente en que pueda detener una reforma que refleja las ansias de control de ciertos partidos políticos sobre el sistema judicial, sin tener en cuenta que la separación de poderes es nuestro mejor sistema defensivo, como democracia, frente a los abusos del poder político y sus arbitrariedades partidarias.

El informe anual sobre el Estado de Derecho, y las consultas que conlleva, es sin duda un instrumento útil y necesario para exigir con la mayor claridad la necesidad de que el gobierno cumpla lo que la Comisión Europea, la Comisión de Venecia y la propia Constitución española indican con claridad. Solo así podremos actuar de forma eficaz respecto al riesgo acumulado de las intenciones que se manifiestan. La Comisión debe ser muy clara sobre la peligrosa deriva del gobierno español y de su deseo confesado de interferencia sobre el poder judicial.

Atentamente,



Maite Pagazaurtundúa

Eurodiputada